

FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA Y PODER POLÍTICO EN LA ARGENTINA: TRABAS PARA LA DEMOCRACIA *

JORGE F. SABATO
JORGE SCHVARZER

“¿Para qué creó Dios la Argentina? — preguntó el creyente ingenuo —”

“Quizás para castigar la soberbia de quienes creen conocer la sociedad de los hombres — contestó el teólogo —”.

(Diálogos imaginarios del Siglo XX)

La Argentina no sólo defrauda a quienes viven en ella sino también a quienes tratan de entenderla. Lo que aquí sucede contradice tanto los conocimientos más aceptados como las tesis contrapuestas más discutidas sobre las sociedades y las economías contemporáneas. Peor aún, refuta hasta el mero sentido común.

La obstinada anormalidad de la Argentina constituye un desafío intelectual para buscar explicaciones. Este trabajo es una tentativa más de responder a ese reto, una búsqueda de claves que sirvan siquiera parcialmente para develar la incógnita.

Deliberadamente hemos preferido darle la forma de un ensayo, presentando de manera breve y asertiva no una explicación sino algunas ideas para construirla.¹ El punto de partida es simple. Como la realidad argentina rehusa ubicarse dentro de ciertos moldes implícita e universalmente admitidos, en vez de insistir en acomodarla

* Charla dada en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Estocolmo el 17 de mayo de 1983. Los autores son investigadores titulares del Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA), Buenos Aires, Argentina.

¹ Casi todas las ideas expuestas son conclusiones obtenidas en diversos estudios e investigaciones realizadas por los autores, motivo por el cual en la bibliografía nos limitaremos a indicar dichas publicaciones, en las que quienes estén interesados podrán encontrar amplias referencias bibliográficas.

dentro de esos lechos de Procusto trataremos de revisar los supuestos que los inspiren mientras observamos, al mismo tiempo, cómo acontecieron los hechos.

En esta labor iconoclasta centraremos nuestra atención en dos fenómenos centrales: la inestabilidad política y el caos económico.

Cuando cualquiera de ambos — y sobre todo cuando los dos juntos — se mantienen persistentemente en una sociedad, desde los más dispares enfoques teóricos se los considera síntomas de una situación patológica. La idea subyacente es que, en esas condiciones, todos los grupos o clases sociales terminan perdiendo a la corta o a la larga. Una sociedad donde nadie en definitiva se beneficia y donde, al mismo tiempo, es difícil o imposible establecer reglas de juego para impedirlo, es vista como una sociedad enferma.

Es imposible verificar la validez de este diagnóstico, aún cuando la experiencia cotidiana parece confirmarlo a cada instante. El que esa situación dure más de medio siglo, el que durante ese lapso tan prolongado se hayan ensayado sin éxito las soluciones más diversas — incluidas entre otras el populismo con Perón, la democracia con Illía, la autocracia con Onganía —, son hechos que han servido para sostener la idea de que existe una profunda crisis en el país. En muchos sentidos es indudable, pero como a pesar de todo la Argentina siguió existiendo y funcionando, conviene examinar los criterios de normalidad habitualmente usados para juzgar el caso. Quizás lleguemos a concluir que lo que se califica como “anormal” sea lo normal en la Argentina e, inversamente, lo que usualmente se entiende como “normal” resulte anormal en este país. No se trata por cierto de un juego ingenioso: las consecuencias pueden ser muy graves si nos confundimos al respecto.

¿Por qué?

La idea de normalidad supone, en rigor, la existencia de fuerzas intrínsecas en toda sociedad que tienden a establecer ciertas formas típicas de funcionamiento. En nuestro caso se trata de la estabilidad en el sistema político y el orden en la economía. Si esas son formas “normales” en toda sociedad, puede pensarse que su búsqueda concitará en definitiva un conjunto poderoso de fuerzas sociales para procurarlas, sea por ejemplo a través de una propuesta de consolidar un régimen democrático de gobierno que no pretenda cambiar la estructura del país — aún cuando tenga la pretensión de reformarla en ciertos aspectos —, sea a través de una propuesta revolucionaria que trate de provocar cambios estructurales, una revolución social para definir un nuevo equilibrio y un nuevo orden en el país. Pero si lo normal en la Argentina es lo anormal para nuestras concepciones subyacentes, la ecuación de fuerzas será muy distinta a la imaginada, la tarea de procurar la democracia o la revolución resultará mucho más ardua y, sobre todo, quizás varíen sustancialmente las estrategias que se pueden concebir para lograr esos objetivos.

Pero dejemos por un instante estas disquisiciones y pasemos a examinar los hechos.

I. La inestabilidad política: ¿anormalidad o normalidad en la Argentina?

Desde el 6 de septiembre de 1930 hasta el momento (abril de 1983), la Argentina tuvo 24 Presidentes de la República — si incluimos al efímero General Rawson y al transitorio Sr. Lastiri —, 16 de los cuales fueron generales. En ese lapso se produjeron seis golpes de estado triunfantes de las Fuerzas Armadas contra gobiernos elegidos (mal o bien, eso no importa por el momento). Las tentativas frustradas de golpes de estado, así como los “planteos” castrenses, se cuentan por decenas si no por centenas. Como presidentes elegidos sólo Justo y Perón pudieron cumplir en dos ocasiones el período establecido por la Constitución y no es casual que ambos fueran militares que previamente habían ejercido liderazgos en el Ejército.

La mera consideración de estos datos, sobre todo cuando se los examina — como ocurre actualmente — hacia el final de un régimen militar, subraya el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas en la desestabilización del sistema político argentino. La comprobación es correcta, pero es pertinente señalar que también los regímenes militares fueron inestables. El general Uriburu, el primer golpista triunfante, se vió obligado a dejar el gobierno antes de lo que deseaba y en una forma que no quería. El General Rawson, en 1943, no alcanzó siquiera a formar su gobierno. El General Ramírez, en 1944, fue relevado por sus camaradas. El General Farrell, en 1945, estuvo a punto de ser echado si no se hubiera producido la movilización popular del 17 de octubre en favor de Perón. El General Lonardi fue destituido en 1955 después de haber encabezado la lucha triunfante contra Perón. El General Onganía fue derrocado en 1970 por las mismas Fuerzas Armadas que produjeron el golpe de 1966. Su sucesor, el General Levingston, sufriría la misma suerte en 1971. Para sacar al general Viola de la Presidencia, en 1981, la Junta Militar inventó una nueva fórmula verbal: declaró que había “cesado en sus funciones”. El relevo del General Galtieri, en 1982, fue más tradicional: se lo obligó a renunciar. De los generales que ocuparon la Presidencia en el período previo a una convocatoria a elecciones, Aramburu y Lanusse sufrieron un destino similar al de Uriburu: en ambos casos las condiciones y por ende los resultados de los comicios fueron opuestos a las intenciones y deseos que los guiaban. Sólo Farrell asistió a una sucesión electoral — la de Perón — acorde con las preferencias de su gobierno. De esta larga lista sólo resulta un ejemplo de estabilidad dentro de un régimen militar: el general Videla fue el único que cumplió el período previamente definido por las mismas Fuerzas Armadas entre 1976 y 1981. Incluso esta afirmación tiene algunos ribetes discutibles, pero más interesante es comprobar que lo ocurrido durante la gestión de Videla — el solitario testimonio de estabilidad militar — ha comenzado a ser el período de los años recientes más abominado por los mismos militares. La moraleja de este largo recordatorio es la que anotamos al comenzar: la inestabilidad política en la Argentina también incluye a los mismos regímenes militares que rompieron la continuidad institucional.

Una visión menos inmediata de estos fenómenos pone en evidencia facetas sugestivas. En todas partes las clases privilegiadas han defendido, por definición, el *statu quo*. En la Argentina conspiraron tradicionalmente contra los gobiernos elegidos. La conjunción de ambos datos indica que en esta nación la vigencia de las reglas institucionales — establecidas por los sectores privilegiados del país en la Constitución de 1853 — y la libre expresión de la voluntad popular dentro de ese marco atentan,

por lo menos desde hace medio siglo, contra los intereses y las orientaciones de las minoritarias clases dominantes.

Esto contrasta con lo que ocurre en los países capitalistas avanzados, donde en líneas generales las clases privilegiadas aceptan o tratan de mantener las reglas políticas preexistentes, mientras que las iniciativas de reformarlas responden más bien a las demandas de los sectores populares. Tal diferencia ha llevado a ubicar a la Argentina entre los países aquejados por el subdesarrollo económico y el atraso social, en los cuales la emergencia de proyectos populistas, aprovechando las pautas políticas de la democracia liberal, tiende a amenazar la posición de las clases dominantes tradicionales. Lo curioso de la Argentina es que no tenía ninguna de esas características cuando en 1930 los grupos privilegiados promovieron el primer golpe de estado. Por el contrario, en ese momento se encontraba entre las naciones más prósperas del mundo y había llegado sin grandes sobresaltos a abrir socialmente un régimen político que regía desde hacía casi siete décadas prácticamente sin quiebras. A esta diferencia que existió en los orígenes se añade otra mantenida a lo largo de todo el período: sin desdeñar la importancia de los problemas sociales existentes en la Argentina, no puede ignorarse que su gravedad fue mucho menor que en los países subdesarrollados típicos. La formación temprana de una vasta clase media y la ausencia de cuestiones social-agrarias dominantes (como las que en otros países planteó una población mayoritariamente campesina), hizo que los movimientos populares masivos no asumieran proyectos revolucionarios. De hecho ninguno de los gobiernos electos con vocación popular, ni antes ni después de 1930, pretendió transformar de raíz la estructura capitalista de la sociedad argentina sino, a lo sumo, introducir algunas reformas sociales dentro de ella. Por lo tanto no puede decirse que los sectores dominantes propugnaran la inestabilidad institucional como una defensa extrema contra propuestas políticas y sociales que amenazaban su existencia como clase.

Observando más de cerca el comportamiento político de las clases privilegiadas, aparece otro rasgo interesante: además de desestabilizar a los gobiernos electos también intentaron desestabilizar, en diversos momentos y en ocasiones con éxito, a gobiernos que surgieron en todos y cada uno de los regímenes militares. Esa historia comenzó con el mismo Uriburu en 1931, continuó con Ramírez y Farrell entre 1943 y 1945, resultó exitosa con Lonardi en 1955, con Levingston en 1971 y con Viola en 1981.

La primera conclusión, obvia, es que estas clases privilegiadas, además de ser incapaces de ejercer o controlar a los gobiernos elegidos, tampoco fueron aptas para establecer alianzas permanentes y perdurables con los militares que las ayudaban a derribarlos. Pero de esta conclusión surge otra más sorprendente: las clases sociales dominantes prefirieron y estimularon sistemáticamente la ruptura de toda estabilidad política en el país.

¿Cómo se puede conciliar este fenómeno con la posibilidad de mantener un *statu quo* en el que se preserve la posición privilegiada de estas clases?

Hay dos respuestas plausibles a la pregunta: o bien las clases dominantes, incapaces de engendrar soluciones políticas estables, encontraron que las otras soluciones que podían darse eran más dañinas para ellas que la inestabilidad permanente; o bien la inestabilidad política no amenazaba realmente la preservación de su posición

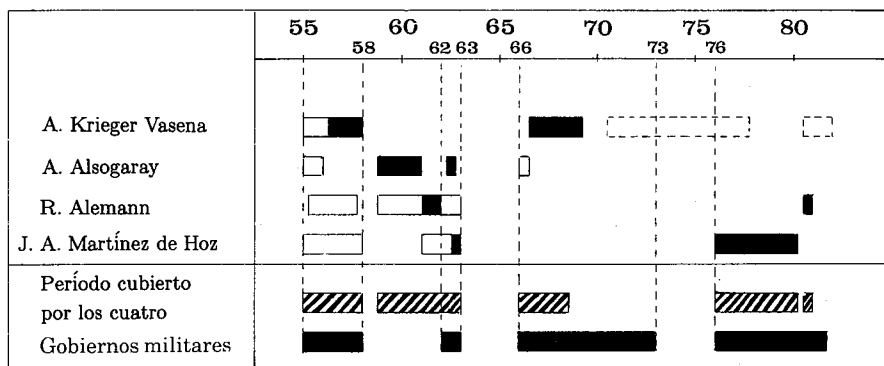
privilegiada.

En ambos casos, por uno u otro motivo — y naturalmente con mayores o menores perjuicios —, a los ojos de las clases dominantes la inestabilidad política efectiva resulta una forma de funcionamiento más normal que la estabilidad posible, invirtiendo las nociones usuales al respecto. La conclusión es aún más sorprendente cuando se comprueba cómo se ha ido acentuando el caos y estancamiento económico de la Argentina durante las últimas décadas. Pero antes de examinar este aspecto vale la pena señalar algunos indudables beneficios proporcionados por la inestabilidad política a las clases dominantes en el ámbito del poder.

Gracias al golpe de Uriburu las clases privilegiadas dominaron el gobierno de la República entre 1930 y 1943. La revolución militar de ese año y el gobierno peronista las desalojaron en gran medida hasta 1955 aunque el auge del peronismo, en rigor, sólo se ubica entre 1945 — cuando nitidamente aparece como una opción política distinta — y 1952, cuando el proyecto entra en crisis política y económica. A partir de 1955 la influencia de los pequeños grupos sociales dominantes sobre los gobiernos, aunque con interrupciones, prevaleció sobre la que pudieron tener el resto mayoritario de los demás sectores argentinos. Para no repetir una crónica detallada y conocida, nos limitaremos a recordar, como indicador sugestivo, el papel desempeñado durante estos últimos 28 años por cuatro personas estrechamente ligadas con las clases privilegiadas: Adalberto Krieger Vasena, Alvaro Alsogaray, Roberto Alemann y José Alfredo Martínez de Hoz (h). En el Gráfico 1 se señalan los años en que estas personas ocuparon cargos relevantes en los gobiernos a lo largo del período.

Como se ve, en conjunto estas cuatro personas cumplieron funciones clave en el gobierno durante 17 de los casi 28 años transcurridos desde septiembre de 1955 hasta la actualidad. Ellos fueron, realmente, los artífices principales de una política económica que sacrificó sistemática y repetidamente a los sectores populares en la historia reciente del país; los únicos que tuvieron, además de continuidad, la capacidad para retornar una y otra vez a la conducción económica gracias a su contacto con factores de poder. Este último punto es decisivo y debe recalcar: ningún otro conjunto de personas, ni ningún otro grupo social fuera de las clases dominantes, consiguió mantenerse durante tanto tiempo manejando la economía argentina desde el gobierno. Hay algo más que subrayar: la mayor parte de esos 17 años — a los que quizá correspondiera agregar algunos más en favor de los grupos privilegiados por la influencia que tuvieron otros funcionarios aparte de los cuatro mencionados — no fueron iguales a los años restantes. En efecto, en repetidas ocasiones esos Ministros gobernaron con regímenes que habían suprimido las garantías constitucionales, prohibido las huelgas y eliminado el Congreso. Por eso dispusieron de un poder considerablemente mayor al de sus colegas en gobiernos constitucionales, quienes estaban sujetos a las críticas en los medios de difusión, a la protesta de los sectores sociales que se consideraban afectados con sus medidas y a la necesaria discusión parlamentaria de las leyes y disposiciones que proponían para conducir la economía del país. Los representantes de las clases dominantes, en cambio, pudieron obrar con la máxima discrecionalidad cuando estaban en el gobierno y con todos los derechos y libertades cuando pasaban a la oposición.

Grafico N° 1



Adalberto Krieger Vasena comenzó a actuar en la función pública en 1956 y llegó al puesto de Ministro de Economía en 1957, a los 37 años de edad. Se mantuvo en el cargo hasta la entrega del gobierno por la Revolución Libertadora y pasó a la actividad privada por varios años. En enero de 1967 fue designado otra vez Ministro de Economía (entonces reforzado con la inclusión de la cartera de Trabajo) y permaneció como tal hasta junio de 1969. A lo largo de la década del setenta actuó como vicepresidente del Banco Mundial, un puesto clave en el ámbito financiero internacional, y volvió al país en 1978. A partir de 1981 es Director de la Bolsa de Comercio y consejero reservado de ministros y funcionarios gubernamentales. A fines de ese año su nombre figuró como candidato al Ministerio de Economía antes que finalmente fuera designado Roberto Alemann.

Alvaro Alsogaray fue nombrado Ministro de Industria en 1956, a los 43 años de edad. En junio de 1959 llegó a ser Ministro de Economía, puesto que mantuvo hasta abril de 1961. Un año después ocupó nuevamente el cargo hasta diciembre de 1962. En junio de 1966 fue nombrado embajador en los Estados Unidos, su último cargo en la función pública.

Roberto Alemann comenzó su carrera de funcionario en 1956, a los 34 años de edad, como Consejero Financiero en Londres. A partir de 1960 fue asesor del Ministerio de Economía y llegó a ocupar dicho cargo en abril de 1961, a los 38 años. Renunció en enero de 1962 y poco después fue nombrado embajador en los Estados Unidos, cargo en el que permaneció hasta el fin del gobierno del Presidente Guido. Su hermano Juan fue Secretario de Hacienda con Martínez de Hoz en 1963 y, nuevamente, entre 1976 y 1981. En diciembre de 1981 Roberto Alemann volvió a ser Ministro de Economía y quedó en tal cargo hasta la renuncia del General Galtieri a la Presidencia en junio de 1982.

José Alfredo Martínez de Hoz (h) se inició en la función pública como Ministro de Economía de la Provincia de Salta en 1956, a los 31 años de edad. Ocupó varios puestos en los años siguientes y al terminar el período de la Revolución Libertadora era Vicepresidente de la Junta Nacional de Granos. Reaparece en la función pública como Presidente de esa misma institución en 1961, desde donde pasa a ser Secretario de Agricultura y luego Ministro de Economía en mayo de 1963 (a los 38 años de edad) hasta octubre del mismo año. Martínez de Hoz volvió a ser Ministro de Economía en marzo de 1967 y logró entonces el récord de permanencia en ese cargo al ejercerlo durante cinco años, hasta marzo de 1981. Se convirtió así en el único Ministro de Economía de la Argentina moderna que se mantuvo en su cargo durante un período presidencial completo, aunque éste fuera de facto.

A las ventajas obtenidas en los hechos se sumaron las logradas en las ideas. Durante las últimas décadas, gracias a un ambiente internacional propicio, al control de los medios de información, a la manipulación del sistema educativo y a la destrucción de los centros de pensamiento independiente, se produjo un abrupto corrimiento hacia la derecha en la difusión y discusión de ideas dentro del país. Posiciones que podían defenderse y difundirse con toda libertad en la década del 20, medio siglo más tarde eran repudiadas, prohibidas y hasta podían ser motivo suficiente para exterminar a quienes las sostuvieran.

Dentro de esa atmósfera intelectual enrarecida el triunfo más espectacular logrado por las clases dominantes consistió en crear una imagen — ocasionalmente aceptada por amplios sectores — según la cual la inestabilidad y el caos en el país eran originados por las demandas y presiones populares. De este modo los grupos privilegiados se presentaron a sí mismos frente al resto de la sociedad como defensores del orden, tanto cuando conspiraban contra gobiernos a quienes acusaban de perturbarlo, como cuando reprimían, desde el gobierno, a la oposición con el mismo argumento. Al hacer el balance de quiénes se beneficiaron y quiénes se perjudicaron con la inestabilidad política, parece algo forzado pensar que los que perdieron la provocaron y los que ganaron trataron de evitarla. Veamos entonces qué sucedió con el caos económico.

El caos en la economía: ¿anormalidad o normalidad?

Admitamos siquiera provisoriamente que la inestabilidad política durante las últimas décadas favoreció de hecho a las clases privilegiadas de la Argentina en el ámbito del poder. Aceptemos por un momento que, más allá de una impresión inmediata según la cual parecía existir un “empate político” que creaba un equilibrio inestable — y por lo tanto fácil y constantemente quebrado —, en el fondo se asistía a una dinámica política que a mediano y largo plazo permitía ganar aún más poder a los grupos sociales y económicos dominantes.

Lo chocante de esta conclusión aparece en sus consecuencias más obvias. Porque es evidente que la inestabilidad política en la Argentina originó bruscos y permanentes virajes que alteraron sin cesar el funcionamiento de la economía. En efecto, cada golpe de estado, cada planteo militar y cada crisis política dentro de un mismo gobierno, fue por lo general motivo para adoptar medidas que provocaban cambios agudos en el contexto económico. Las devaluaciones de la moneda; la modificación repentina en los mecanismos de fijación de precios — desde los controles impuestos o acordados hasta la más amplia libertad de mercado —; los cambios abruptos en la política de salarios, de impuestos y de subsidios, fueron todos factores que engendraron permanentes y significativas variaciones en los precios relativos de bienes y servicios dentro del país. El testimonio más expresivo de estos fenómenos apareció dramáticamente en la hiperinflación que aqueja a la Argentina durante los últimos tiempos: en junio de este año se cumplen ocho años consecutivos con una inflación anual de tres dígitos. El mercado no puede ofrecer ninguna señal para tomar decisiones a largo o mediano plazo cuando las variables económicas fluctúan a ritmos tan elevados. Por otra parte, los cambios de dirección en las políticas económicas imposibilitan el reemplazo del mercado por una conducción planeada.

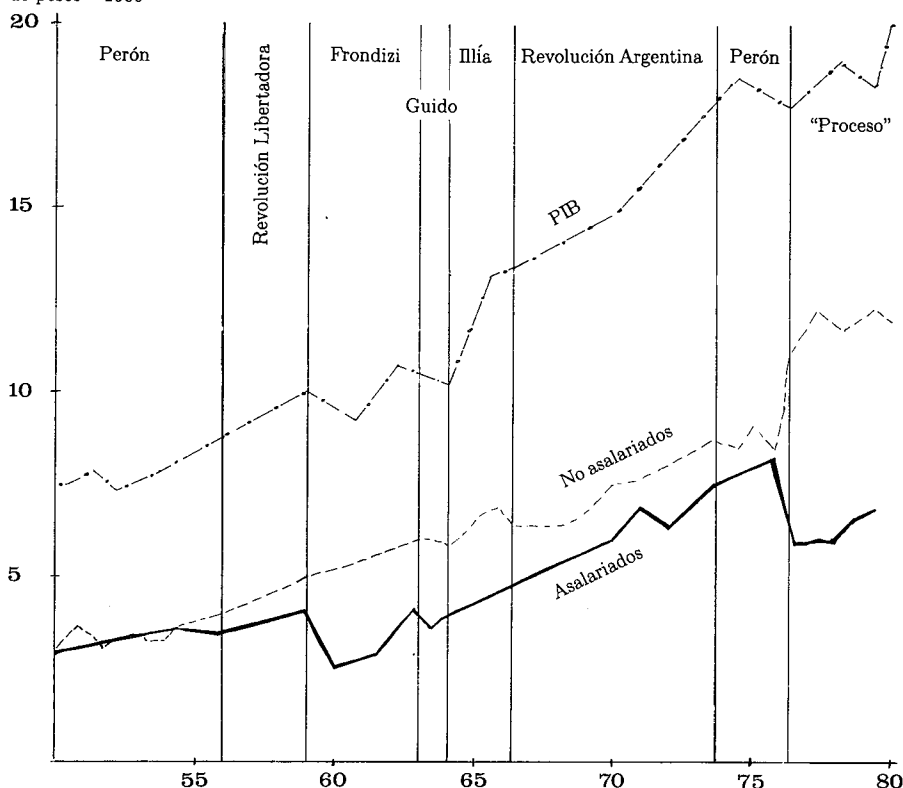
La incertidumbre y la imprevisibilidad se esfuman ostensiblemente e imposibilitan el manejo adecuado de los sectores productivos. La inestabilidad política repercute en la esfera económica y ésta lanza reacciones reflejas sobre aquélla. progresivamente, el reino del caos quedó instaurado dentro del país

Este fenómeno resulta en primera instancia contradictorio con la naturaleza misma de una organización capitalista de la sociedad: normalmente este tipo de sociedades requiere para funcionar un alto grado de estabilidad, impersonalidad y previsibilidad en el desarrollo de las relaciones económicas. Obviamente, como en cualquier otra sociedad de clases, es preciso como requisito previo imponer y mantener una estructura específica de dominación social; pero no cabe duda que los requisitos de funcionamiento que acabamos de mencionar — y que naturalmente condicionan y alimentan las formas de dominación — marcan la singularidad de la sociedad capitalista. Su búsqueda se encuentra tanto en la raíz de las revoluciones liberales burguesas como en la formación de algunos gobiernos autoritarios modernos. La

Gráfico N° 2

Producto interno bruto, ingreso de asalariados e ingreso de no asalariados

Miles de millones
de pesos - 1960



Fuentes: 1950-73: Banco Central de la República Argentina

1974-81: Estimaciones de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo

estabilidad, la impersonalidad y la previsibilidad en las relaciones económicas son condiciones absolutamente necesarias — aunque no suficientes — a fin de que una organización capitalista pueda desplegar su formidable capacidad para desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad, estimulando un crecimiento económico que beneficia ante todo a los empresarios capitalistas, pero que a la vez permite lograr consenso en las clases dominantes e imponer de este modo su hegemonía.

¿ Por qué entonces en la Argentina los sectores más privilegiados pudieron estar interesados en fomentar una inestabilidad política que, si bien les otorgó un creciente poder, generaba un caos económico aparentemente atentatorio contra sus intereses más profundos y permanentes?

Así como con la inestabilidad política, la pregunta se vuelve más acuciante cuando se toman en cuenta las características económicas y sociales del país. No sólo hacia 1930 sino también a lo largo del medio siglo transcurrido desde entonces, existieron repetidas oportunidades para emprender un crecimiento económico significativo, al tiempo que, como vimos, ningún movimiento político popular masivo amenazó con una revolución que modificara sustancialmente la estructura capitalista de la sociedad.

La pérdida de estas oportunidades, el estancamiento creciente de la economía — entre 1970 y 1982 el producto interno bruto (PIB) casi no creció, el PIB *per cápita* descendió y el producto industrial cayó significativamente — parecen ofrecer testimonios indudables de los perjuicios ocasionados por el desorden económico.

Cuando se reúnen estos datos empíricos con las consideraciones teóricas antes señaladas, parece aún más flagrante la contradicción entre la proclividad a favorecer la inestabilidad política por parte de los sectores privilegiados y los perjuicios que les ocasionaría el caos económico resultante.

Esta impresión, sin embargo, se contradice con otros datos. En el Gráfico 2 presentamos las series del PIB a precios constantes junto con la distribución del ingreso entre los asalariados y los no asalariados. Lo primero que resalta es que el ingreso de los no asalariados ha crecido casi sin cesar a lo largo del período y, debido sobre todo a la caída de los ingresos de los asalariados en los últimos años, más que el PIB. En efecto, la tasa de crecimiento anual acumulativa entre 1950 y 1980 fue del 3,1% para el PIB y de 4,1% para el ingreso de los no asalariados. Si dividimos el período simplemente por décadas surge un hecho aún más curioso:

Tasas acumulativas anuales de crecimiento

	PIB	Ingreso de los no asalariados
1950/60	2.7%	4.7%
1960/70	3.8%	2.6%
1970/80	2.4%	4.3%

Como se ve, el ingreso de los no asalariados creció menos cuando el PIB creció más e, inversamente, creció más rápido cuando la tasa de crecimiento del PIB disminuía.

Desde ya los datos sobre distribución del ingreso entre asalariados y no asalariados es un mero e insuficiente indicador de lo que pudieron obtener los sectores más privilegiados. Es muy probable, sin embargo, que respecto de estos grupos los datos expuestos sean indicios que tiendan a pecar más bien por defecto que por exceso. La experiencia cotidiana, así como estudios parciales sobre procesos de concentración empresarial y modificaciones en la participación de ciertos sectores en la formación del PIB, sugieren que durante los últimos lustros los grupos sociales superiores incrementaron sustancialmente su riqueza en términos absolutos.

Lo menos que se puede decir frente a estos datos e indicios es que ni el caos ni el estancamiento económicos parecen haber perjudicado notoriamente a las clases privilegiadas en la Argentina. Quizás podría sostenerse que con orden y un crecimiento acentuado (como el que podría teóricamente imaginarse para el país) se hubieran beneficiado aún más. A esta hipótesis, no desdeñable por cierto, pueden oponerse dos objeciones. En primer lugar, que los sectores privilegiados no sufrieron perjuicios tan graves como para reconsiderar y redefinir los comportamientos que inducían al caos económico (por ejemplo su proclividad a favorecer la inestabilidad política). En segundo lugar, su experiencia inmediata puede haberles indicado que no era tan evidente que acelerando el crecimiento de la economía sus ingresos se incrementarían: lo ocurrido en la década del 60 parecía demostrar lo contrario.

Es posible, entonces, que el caos económico no resultara tan anormal para estos grupos como habitualmente se piensa. Más aún, quizás ese caos corresponde a una situación mucho más normal para las clases privilegiadas argentinas que el orden, la estabilidad y la previsibilidad en el desenvolvimiento de las relaciones económicas. Tratando de repensar los hechos en estos términos, podemos sugerir algunas hipótesis acerca de la lógica del sistema económico y político vigente en la Argentina que nos permitan explicar esta inversión de las nociones de "normalidad" habitualmente aplicadas en un país capitalista.

III. La lógica del sistema

1. *La base económica*

A primera vista no es sencillo admitir que una economía capitalista donde prime el caos sobre el orden, la conjetura sobre la previsibilidad, pueda tener alguna lógica. Lo que nos desconcierta ante tal situación es el hábito de pensar en términos de producción, algo muy natural cuando hablamos de economía. El caso argentino, sin embargo, nos obliga a recapitular y reconsiderar las nociones más simples y obvias que ordenan nuestro pensamiento, como paso necesario para simplificar también la explicación del ejemplo anómalo.

Recordemos, entonces, que cuando examinamos la economía de una sociedad de clases tratamos dos fenómenos básicos: por un lado la producción de bienes y servicios y, por otro, la distribución desigual de los excedentes económicos entre la población. Ambos fenómenos están vinculados entre sí, a veces de manera indisoluble y otras en formas más laxas. Posiblemente una de las características

relevantes del capitalismo moderno reside en que, a través de la apropiación privada de los medios de producción, el mecanismo fundamental para asegurar una distribución desigual de los excedentes está incorporado en la organización misma de la producción. La singularidad de este rasgo resalta por contraste cuando comparamos el sistema capitalista con otras sociedades clasistas en las que los grupos privilegiados y dominantes no siempre — y más bien raramente — estuvieron integrados de manera tan íntima al proceso productivo. En esos casos la captación de la mayor parte de la riqueza por una minoría de la población se basó prevalentemente en otros mecanismos. El dominio de la fuerza física, por ejemplo, permitía realizar una exacción directa de la riqueza generada por quienes trabajaban y producían. Más sutiles e indirectos fueron los mecanismos de apropiación basados en el monopolio de instrumentos intelectuales, en la organización de espacios económicos o en el control de las transacciones mercantiles y financieras.

De hecho todos estos mecanismos casi siempre estuvieron históricamente presentes, aunque en proporciones variables, en las distintas sociedades de clase. También lo están en las sociedades capitalistas actuales: el modo de producción capitalista es la expresión conceptual de un fenómeno que aparece de manera dominante pero no pura, sino mezclado con otras formas de organización, en una realidad histórica. Aún así, la íntima conexión de las raíces de la clase capitalista con el proceso productivo y su forma de organización, ligó la expansión y la hegemonía de esta clase al aumento de la producción, propulsando un formidable desarrollo de las fuerzas productivas como nunca antes se había dado en la historia de la humanidad. No es extraño entonces que este fenómeno, tan ostensible en las naciones que lideraron y lideran al sistema capitalista en el ámbito internacional, haya colocado la cuestión de la producción, explícita o implícitamente, como centro o como supuesto básico de todo pensamiento sobre la economía. Parodiando a Bachelard — cuando señalaba cómo el deslumbramiento ante el fenómeno de la vida entorpeció el desarrollo de la química — diríamos que así se abrió lugar a una intuición engeñecedora que toma a la producción como un **dato** claro y general, dmpidiéndonos percibir otros fenómenos con suficiente claridad de espíritu.

Sin embargo estos otros fenómenos existen. Precisamente la formación histórica de cada realidad fue abriendo paso a heteróclitas combinaciones que permitieron, en la periferia del sistema capitalista internacional, el surgimiento de otras sociedades capitalistas con rasgos específicos y con una lógica de organización distinta a la que predomina en los centros del sistema. Creemos que la Argentina es un ejemplo — quizás extremo — al respecto, y nuestra hipótesis es la siguiente: buena parte del proceso económico argentino se origina en condiciones que alientan la captación de excedentes en los circuitos de circulación con preferencia sobre los mecanismos de producción de riqueza. En este fenómeno estructural, básico, se apoyan las “anormalidades” que proliferan en el país y lo distinguen de las economías que privilegian la producción. Esto no significa que en la Argentina no rija una organización capitalista en la producción y en la economía en general, sino — en términos algo más precisos aunque más herméticos — que en el ciclo de reproducción del capital domina la reproducción ampliada del capital-dinero, a la que se subordina la reproducción ampliada del capital productivo; es decir a la inversa de lo que ocurre — al menos hasta el momento — en las naciones que ocupan el centro del sistema capitalista en el mundo.

No se nos escapa que al formular estas ideas hemos sacrificado la claridad en beneficio de la concisión. Lo hicimos para dejar sentado de entrada hacia dónde apunta nuestra reflexión. Ahora trataremos de precisarla y fundamentarla. Teniendo en cuenta que lo que hemos hecho es sintetizar los rasgos esenciales de un fenómeno que se fue generando a través de un proceso histórico específico, la mejor manera de esclarecer el alcance de las hipótesis posiblemente consista en recapitular brevemente las fases de ese proceso durante las cuales se formó y consolidó esa peculiar forma de organización capitalista de la economía en la Argentina.

2. Génesis y consolidación histórica

En nuestra opinión hay tres momentos clave que sucesivamente dieron origen, fortalecieron y otorgaron sus rasgos actuales al modelo de funcionamiento recogido en la hipótesis. Esos momentos corresponden al de la integración de la economía argentina al mercado mundial — en las últimas décadas del siglo pasado —, al del cerramiento de esta economía — desde la crisis mundial de 1930 hasta mediados de la década del 50 — y al de la apertura al circuito financiero internacional desde fines de la década del 50, con especial énfasis en el subperíodo iniciado en 1976.

a) La integración de la economía argentina al mercado mundial y la formación del modelo (1880–1920)

La integración de la economía argentina al mercado mundial se produjo gracias a un veloz crecimiento de la producción y la exportación de granos y carnes, aprovechando las ventajas ofrecidas por la pampa húmeda, una de las grandes praderas templadas despobladas del planeta que se pudieron poner en explotación durante la segunda mitad del siglo XIX.

Así, en poco más de una generación, tuvo lugar una rápida y considerable acumulación de excedentes económicos originados en la renta diferencial de la tierra a escala internacional que aportaba la pampa. Este es el primer hecho significativo: la acumulación de capital en la economía derivaba fundamentalmente del uso de un recurso no producido por el hombre sino otorgado por la naturaleza. El trabajo y la inversión requeridas para poner en producción la pampa, aunque no fueron de ningún modo desdeñables, eran no obstante pequeños en relación a los beneficios obtenidos. Para las clases privilegiadas de la época, entre cuyos miembros se habían repartido poco antes grandes extensiones de tierras, este hecho creó una noción subyacente de riqueza fácil, debida mucho más al aprovechamiento de una oportunidad que al esfuerzo para ganársela.

A pesar de todo, este punto de partida no hubiera sido suficiente para generar el modelo que hipotetizamos si no hubieran mediado factores adicionales. En efecto, aproximadamente en la misma época también en otros países, como los Estados Unidos, el Canadá y Australia, la renta diferencial de la tierra a escala internacional contribuyó sustancialmente a la acumulación de capital que en ellos se produjo, pese a lo cual su evolución posterior fue muy distinta.

El primer elemento que indujo la diferencia fue el sistema de producción adoptado en la pampa. Este sistema provocó tres efectos que no tuvieron lugar en las praderas templadas de los Estados Unidos y del Canadá:

-otorgó una mayor eficiencia económica a las grandes explotaciones frente a las de familias de colonos, lo cual permitió conservar extensas propiedades, consolidando una clase de grandes terratenientes y acarreado una fuerte concentración de los ingresos y de los excedentes generados en la pampa;²

-acostumbró a esa clase empresaria a que, actuando con criterios de eficientes empresarios capitalistas, variara permanentemente el tipo de producción rural (agrícola o ganadera) en función de las oportunidades ofrecidas por el mercado; esta posibilidad de acomodarse a circunstancias cambiantes les permitía disminuir riesgos y obtener ganancias superiores a las que podían lograrse incrementando la productividad de los factores;

-consiguientemente desestimuló la colocación de las ganancias obtenidas en inversiones productivas especializadas, favoreciendo en cambio el mantenimiento de activos líquidos o semilíquidos que podían ser destinados alternativamente a la producción más rentable.

Estas características del empresariado rural, cuya importancia derivaba del lugar central ocupado por la producción pampeana en la economía argentina de la época, se vieron enormemente reforzadas por las condiciones de contexto vigentes en ese tiempo. La concentración de considerables excedentes líquidos en manos de un pequeño sector social tendría varias consecuencias. Además de estimular un consumo suntuario y ostentoso — fenómeno reiteradamente señalado en descripciones y estudios —, pudo articularse con circunstancias propicias que terminarían potenciándolo. En efecto, en esa época se asistía a un período de veloz crecimiento de toda la economía argentina, impulsada precisamente por la expansión de la producción pampeana, que abría innumerables oportunidades para colocar los excedentes líquidos generados en el sector rural. Desde las construcciones urbanas hasta la naciente industria, pasando por el comercio, la banca y los trabajos públicos, múltiples actividades estaban ávidas por contar con fondos para desarrollarse. Se asistió entonces a una rápida diversificación de actividades por parte de un mismo núcleo de empresarios, mientras se reforzaban las ventajas de un comportamiento dirigido a aprovechar las oportunidades más que a aumentar la eficiencia productiva: en la febril expansión de las actividades urbanas iban apareciendo sucesivamente ventajas de unas sobre otras, y quienes pudieran aprovecharlas desplazándose con rapidez según conviniera, tenían la oportunidad de obtener excelentes ganancias.

De este modo se fue conformando un rasgo muy particular de la burguesía y del capitalismo en la Argentina: mientras en otros países una cierta especialización productiva impulsaba a los empresarios capitalistas a buscar la maximización de sus ganancias en los aumentos de productividad, aquí la experiencia cotidiana les demostraba que lo más conveniente era aprovechar las oportunidades alternativas abiertas por diversas actividades, para lo cual lo más importante era acumular capitales suficientemente líquidos. En otras palabras, aún dentro del ámbito produc-

² Tradicionalmente se ha postulado que el sistema de producción pampeano, al cual se juzgaba irracional y en ocasiones precapitalista, se debió a la existencia previa de grandes terratenientes debido al reparto inicial de tierras libres entre los miembros de grupos influyentes en la Argentina del siglo XIX. Una serie de investigaciones que realizamos durante los últimos años nos condujo a una conclusión inversa: fue el sistema de producción que se instauró, plenamente capitalista y muy racional, el que permitió mantener y expandir la concentración de la propiedad en la región pampeana.

tivo el empresario capitalista no estaba orientado a actuar con el criterio de un productor sino más bien con el que correspondería al de un comerciante o financista.³

Lo interesante es que, durante el periodo de integración de la economía argentina al mercado mundial, este rasgo no frenó sino que aceleró el crecimiento económico. La razón era muy simple: como la productividad de la pampa argentina era internamente muy alta, resultaba mucho más provechoso ampliar la cantidad de tierras en explotación que aumentar su productividad por unidad de superficie. Por consiguiente todas las actividades que directa o indirectamente estimularan el avance de la frontera agropecuaria quedaban "atadas" a la alta productividad de la economía pampeana en términos internacionales. Tanto el sistema de producción instaurado en la pampa como la posibilidad de propulsar la provisión de bienes y servicios colocando con gran agilidad capitales líquidos, contribuían a la ampliación de la frontera agropecuaria con mayor eficiencia de la que hubiera tenido un sistema económico más compartimentalizado y rígido. En consecuencia, la expansión de la economía argentina fue comparativamente más veloz que la que se dió durante períodos similares en otros países con "fronteras abiertas". Estas condiciones macroeconómicas son las que, en el trasfondo, dieron apoyatura a los comportamientos microeconómicos que tendían, en el ciclo de reproducción del capital, a privilegiar la reproducción ampliada del capital-dinero sobre la del capital productivo, tal como enunciamos en la hipótesis.

¿Qué pasaría cuando, al agotarse el avance de la frontera agropecuaria, no se pudiera seguir usufructuando de la alta productividad de la pampa en términos internacionales y cesara la base macroeconómica de ese modelo de funcionamiento empresario?

Antes de pasar a examinar este punto conviene señalar, sin embargo, un par de consecuencias económicas y sociales que habría acarreado la internalización de ese modelo de comportamiento de los empresarios capitalistas argentinos.

Desde el punto de vista económico cabe anotar que las señales básicas que indicaban las oportunidades que podían aprovecharse desplazando capitales líquidos eran las variaciones de los precios relativos. En este sentido la forma de funcionamiento instaurada resultaba peculiarmente adaptable a una economía sometida a fuertes fluctuaciones en los precios relativos, fenómeno que en otros países podía acarrear graves trastornos, por ejemplo si los empresarios capitalistas estaban atados a grandes inversiones productivas cuya rentabilidad quedara comprometida por esos movimientos de precios. Correlativamente la clase de empresarios capitalistas argentinos no estaba motivada para amortiguar esas variaciones sino, por el con-

³ Este fenómeno, por lo demás, se engarzaba con una serie de antecedentes históricos de gran importancia en el país. La región pampeana estaba en el área de influencia de Buenos Aires, zona en la que había predominado una economía de recolección dentro de la cual los sectores más avanzados — y los más prósperos y privilegiados — estaban vinculados al comercio de los productos del país. Fueron esos sectores los que promovieron cambios en la producción rural y fueron adueñándose de las tierras libres. Y lo hicieron también con criterio comercial, es decir preocupándose por aprovechar las oportunidades ofrecidas por el mercado internacional más que por mejorar la producción. Por esa razón se verificaron cambios muy violentos y masivos que de otro modo serían algo sorprendentes: así, por ejemplo, en menos de veinte años — entre 1850 y 1870 — se asistió al desplazamiento brusco de la ganadería bovina tradicional por la ganadería ovina, mientras que veinte años más tarde se produciría un movimiento inverso que, en poco más de una década, liquidó millones de ovejas para reemplazarlas por millones de vacas.

trario, podía percibir en ellas un mecanismo útil para que, desplazándose convenientemente, estuviera en condiciones de mantener o aumentar su tasa de ganancias.

En cuanto a la sociedad, quisiéramos subrayar un par de efectos que nos parecen esenciales. Mientras que el cuadro global generado por la expansión de la economía argentina en esa etapa se asemejaba bastante al que podía encontrarse en otras "sociedades abiertas" de la época (Estados Unidos, Canadá, Australia), es decir el de países en los que se verificaba una apreciable movilidad social y la formación de importantes sectores medios, el modelo de comportamiento predominante entre los empresarios otorgó características bastante diferentes y distintivas a la burguesía capitalista. En primer lugar porque la diversificación de las actividades empresariales impidió que se formaran fracciones netamente separadas (empresarios agrícolas, empresarios industriales de diverso tipo, comerciantes, financistas, etc.) que estuvieran impulsadas a defender sus intereses específicos frente a eventuales ventajas que podían tratar de ganar los demás grupos. En otros términos, la burguesía capitalista argentina presentaría mucho menos divisiones internas que las que se verificaban en naciones parecidas de la época o, dicho en forma inversa, una mayor homogeneidad interna que la existente en esos otros países. En segundo lugar el modelo de funcionamiento favorecería una rápida y fuerte concentración de ingresos en el seno de esa burguesía, creando un estrato superior en su cúspide que dispondría de un formidable poder económico y una poderosa influencia política dentro de la Argentina.

Las manifestaciones más ostensibles de ambos rasgos se verificarían, por un lado, en la temprana aparición de grupos económicos polifacéticos, verdaderos "conglomerados" *avant la lettre*, que ocuparían un lugar destacado en las más variadas actividades (producción rural, industrias, construcciones públicas y privadas, comercio, banca). Por su parte la concentración de riqueza y de poder se manifestaría en la temprana visualización de un grupo homogéneo aunque difuso que detentaba una riqueza y un poder inconmesurablemente superiores a todo otro grupo social en la Argentina, una "oligarquía" difícil de definir pero fácil de identificar en el seno de la sociedad.

Las dos características básicas de esta clase dominante diferenciada dentro de la burguesía argentina darían origen a un sistema de relaciones políticas sustancialmente distintas a las que se generaron en las otras sociedades abiertas de la época y, en el futuro, marcarían en gran medida la evolución tan diversa observada en la economía y la política argentinas.

b) El cierre de la economía argentina mediante la sustitución de importaciones (1930-60)

La ocupación de la pampa se terminó de concretar hacia 1920. Los aumentos posteriores de la producción agraria ya no podían provenir de la explotación extensiva de la tierra. El mecanismo que había propulsado un largo período de auge había agotado su capacidad y, tarde o temprano, obligaría a replantear las bases sobre las que se asentaba la economía nacional. Pero ese fenómeno, que marcaba el fin de una época, quedó oculto a raíz de los efectos inmediatos y acuciantes provocados por la crisis mundial de 1929. Entonces el cierre de los mercados del exterior restó toda importancia al aumento de la producción agropecuaria puesto que con suerte apenas se podía colocar lo disponible. Las exportaciones eran vitales para

la Argentina; sólo a través de ellas se podía pagar las importaciones de numerosos bienes requeridos por su relativamente amplio mercado interno. Lentamente, la economía nacional comenzó a cerrarse sobre sí misma impulsada por las nuevas condiciones del mercado creadas por la crisis y luego acentuadas por la Segunda Guerra Mundial. En esta nueva etapa la satisfacción de las demandas locales ofrecía oportunidades apreciables para el surgimiento y consolidación de ciertas actividades industriales que fueron tomando importancia a lo largo de las décadas siguientes.

La industrialización se orientó, casi exclusivamente, a atender el mercado local ya existente y que hasta entonces satisfacía su demanda mediante el recurso a los bienes del exterior. La industria atendía un mercado cautivo en el que la imposibilidad de importar eliminaba la competencia. No es extraño que en esas condiciones su crecimiento quedara limitado a las dimensiones del mercado local existente y con pocos impulsos dinámicos a partir de allí. En cierta forma, el nuevo ciclo tendía a repetir las características del anterior. La producción agropecuaria había crecido horizontalmente, ocupando los espacios vacíos de la pampa; la producción industrial se extendía atendiendo los espacios vacíos del mercado interno dejados por el cierre de las importaciones.

El crecimiento industrial avanzaba rama por rama. Cada vez que una de ellas saturaba la demanda del mercado interno se estancaba dejando lugar a otra. La expansión del conjunto reflejaba la suma de avances esporádicos de corta duración en ramas diferentes que no lograban dinamizar el conjunto de la misma manera que en los procesos clásicos de industrialización.

Otro rasgo importante de la industrialización argentina de esas décadas consiste en que ella se basó, predominantemente, en grandes empresas oligopólicas. Grandes grupos industriales, nacidos en general a comienzos del siglo por obra del modelo de funcionamiento empresario que estimulaba la concentración, tomaron la delantera en la ocupación del mercado local y contribuyeron a mantenerlo bajo un control relativamente estrecho.

El cierre del mercado local y su ocupación prematura por grandes grupos industriales tendió a conferir al crecimiento industrial un carácter particular. Los precios de los bienes se fijaban casi independientemente de las estrictas reglas del juego que impone la competencia; los empresarios industriales tenían la oportunidad de elevar sus precios hasta captar parte de los excedentes generados por el agro. Más aún, dicha estrategia resultaba mucho más redituable que la derivada de un posible incremento de la productividad, como lo hubiera exigido la competencia internacional para conquistar nuevos mercados fuera del país. Se fue generando así una situación en la cual los precios relativos y, por lo tanto, los ingresos reales de los agentes económicos, se formaban en un mercado distorsionado y separado de influencias externas.

Lo curioso en la Argentina es que este proceso no quebró sino que dio nuevo aliento al modelo de funcionamiento empresario formado en la etapa anterior. En otros países "jóvenes" de la época, en los que también se había registrado una rápida expansión económica gracias a la ampliación de la frontera agropecuaria dentro de espacios des poblados — como el Canadá y en particular Australia —, la protección forzosa creada por la crisis mundial abrió una oportunidad a los empresarios industriales para consolidar su posición y transformarse irreversiblemente en los promotores

de una nueva fase de crecimiento a largo plazo. En la Argentina la tendencia a manejarse con alta liquidez y la implantación previa de los empresarios "multifacéticos" en la industria, facilitó, en un primer momento, el cambio de frente para aprovechar las oportunidades ofrecidas a esta actividad por un mercado interno ya formado. Pero las mismas características del nuevo contexto, en el que sucesivamente aparecían ventajas para diferentes ramas de la industria, demostró una vez más la conveniencia de mantener una gran liquidez para desplazarse de una rama a otra en lugar de especializarse y buscar el aumento de las ganancias realizando inversiones que aumentarían la productividad del conjunto.

A la permanencia y consolidación del modelo de funcionamiento empresario, que manifestaba la continuidad dentro del cuadro novedoso generado por la crisis, se agregó sin embargo la aparición de un nuevo elemento que sí marcaría la historia posterior de la Argentina: la acción del Estado sobre las condiciones que enmarcan el quehacer económico.

En efecto, a partir de esos años el Estado comenzó paulatinamente a jugar un papel clave en el proceso de distribución de ingresos. Las necesidades ineludibles creadas por la carencia de divisas, y la presión de grandes intereses económicos, lo llevaron a controlar desde comienzos de 1930 las importaciones. A través de aranceles diferenciados y de diversos mecanismos de control, el sector público comenzó a actuar en relación con el mercado externo, definiendo qué bienes podían entrar y a qué precio. Una protección elevada, o la prohibición de importar un producto, eran suficientes para alentar el surgimiento de la producción local sustitutiva, salvo en los casos de mayor sofisticación tecnológica o de elevados requerimientos de inversión. Lo inverso también era cierto: las facilidades para importar ciertos productos resultaban suficientes para desalentar la producción local de dichos bienes.

Las decisiones del sector público definían la evolución de la balanza comercial y, a través de ella, el perfil de la evolución industrial, la estructura de los precios relativos y las características de la distribución del ingreso. El Estado adquirió un papel relevante en la nueva estructura económica. Con el tiempo, el manejo del tipo de cambio se convirtió en uno de los elementos básicos de la política económica. Es bien sabido que una devaluación generaba una transferencia de ingresos hacia los productores agropecuarios y que una revaluación revertía ese proceso. Al mismo tiempo, ambos sectores presentaban una elevada flexibilidad a la variación de sus precios que acentuaba los efectos de las políticas públicas. Los precios agropecuarios tenían una elevada flexibilidad a la baja debido a sus ventajas comparativas; los industriales también debido a que desde un principio se fijaban en niveles muy altos gracias a las condiciones del mercado interno. Por ello, la fuerza relativa de cada sector, la capacidad de acceso y presión sobre el poder público, la movilización social y política, se fueron convirtiendo en factores más importantes que el "mercado" y la propia "producción" para la apropiación de ingresos.

El panorama se complicó a medida que nuevos grupos surgieron a la vida social reclamando su porción en el reparto. A fines de la década del cuarenta, ese fenómeno social encontró su correlato político en el surgimiento del peronismo que aplicó una fuerte redistribución del ingreso en beneficio de los sectores asalariados. La experiencia demostraba que el aparato del Estado podía ser utilizado en favor de grupos diferentes a los tradicionales y agravó los frentes de conflicto en el sistema.

A partir de entonces las transferencias de ingresos mostraron desplazamientos vertiginosos y cruzados: del campo a la ciudad y vice-versa; de los propietarios — agrarios o industriales — a los asalariados y a la inversa; del sector privado al público y de éste al primero. Las estrategias que afectaban a los precios y a los ingresos lograban resultados tan drásticos e inmediatos que hacían empalidecer toda perspectiva de progreso basada en la expansión de la economía.

Interesa destacar que la pugna en torno a la distribución de ingresos fue eliminando los parámetros clásicos que en otras economías sirven como base de discusión. El cierre del mercado local impedía la aplicación de las estructuras de precios relativos prevalecientes en los mercados mundiales. La constante variación de precios e ingresos anulaba la aplicación de un criterio "histórico" ya que cada participante reclamaba su parte del producto tomando como base el momento de mayor precio relativo de su experiencia anterior. La consolidación del proceso inflacionario a partir de la posguerra no parece ajena a este fenómeno y colaboró, asimismo, para hacerlo más difuso e irresoluble.

Este juego no puede repetirse *ad infinitum*. A largo plazo, una puja de estas características sólo puede encontrar una salida a través del desarrollo de las fuerzas productivas que modifique las posibilidades de la economía de atender las demandas sectoriales. Pero la propia puja dificultaba esta solución. La incertidumbre de precios desalentaba a los empresarios a invertir en activos fijos industriales de larga maduración. Agotada la etapa "fácil" de la industrialización sustitutiva aparecían una y otra vez las limitaciones a su desarrollo posterior que no podían removerse por falta de políticas estables y consecuentes. El desarrollo económico relativamente lento comenzó a convertirse en un dato para la Argentina.

Otra salida podría haberse encontrado a través de la victoria decisiva de un sector social sobre los otros. Los grupos privilegiados tenían capacidad económica, pero no lograban la fuerza política y social necesaria para mantenerse en el poder. Los sectores mayoritarios necesitan de su organización y del control del aparato del Estado para imponerse, pero una y otra vez fueron desalojados de éste a poco de iniciadas sus experiencias.

El dilema mencionado fue llevando a un nuevo modelo de funcionamiento de la economía argentina. Las clases privilegiadas ensayaron distintos tipos de respuesta frente a las experiencias que vivían en el frente político y en el económico. A medida que no lograban imponer su hegemonía sobre la sociedad fueron diseñando una tendencia a evadirse de la puja de ingresos a través de nuevas formas de canalización de los excedentes. Se abrió entonces la etapa de apertura al circuito financiero internacional que continúa hasta la actualidad.

c) La apertura al circuito financiero internacional (1960-)

El nuevo ciclo no tiene un momento de nacimiento tan nítido como fue 1929 para el anterior. Los cambios se fueron consolidando de manera gradual y alcanzaron su forma más acabada a partir de 1975. Sin embargo, el modelo debe dibujarse a partir de los rasgos diseñados desde varios lustros antes.

El aspecto que queremos subrayar reside en dos puntos estrechamente ligados entre sí: las características del modelo anterior llevaron a los empresarios a reforzar la prioridad dada al manejo del dinero líquido y a la salida de capitales del país.

Ellos recurrieron a ambas estrategias para protegerse de los riesgos creados por la puja de ingresos y encontraron simultáneamente en esas estrategias poderosos mecanismos para obtener y canalizar la acumulación de beneficios fuera de la esfera de la producción.

En efecto, las intensas variaciones de ingresos representaban un elevado riesgo para los sectores ligados a estructuras fijas de la producción. Los empresarios ligados exclusivamente a la producción de un cierto bien sufrieron permanentemente los efectos cíclicos de las fluctuaciones de precios e ingresos. Por ello se consolidó una corriente que tendió a canalizar los excedentes de forma de disminuir el riesgo. Una vez más productores agrarios e industriales retiraron beneficios y disminuyeron inversiones tendiendo a mantenerlos en la forma más líquida posible; de esa manera podían saltar de una a otra oportunidad de inversión en busca de las alternativas más rentables en cada momento y, en última instancia, fugarse del país exportando divisas para invertirlas en economías más estables.

Cada vez que los grupos privilegiados asumieron el control de la política económica facilitaron esos movimientos a través de las estrategias aplicadas. Desde 1955 ensayaron sucesivamente la liberación del mercado financiero y la eliminación de las restricciones al flujo de divisas con el exterior.⁴ El privilegio acordado a esas actividades alimentaba los movimientos hacia la liquidez en detrimento de las inversiones fijas en sectores productivos. La escasez relativa de inversiones tendía a disminuir las posibilidades de crecimiento de la economía argentina. El estancamiento incrementaba la intensidad de las pujas sectoriales que se reflejaban en la evolución económica y política. Estos conflictos servían para convencer a los grupos privilegiados de las ventajas de insistir en su estrategia de fuga hacia las actividades especulativas. La presencia de la inflación ofrecía nuevas alternativas de beneficios a través de la variación de los precios relativos. El círculo vicioso alcanzó su culminación en la segunda mitad de la década del setenta cuando las clases dirigentes avanzaron profundamente en esta estrategia.

⁴ Interesa señalar que el argumento con el que desde entonces se propicia la apertura al sistema financiero internacional es exactamente inverso al que anotamos: de manera repetida se ha insistido en que faltan capitales en el país para promover un conjunto de actividades, en particular aquéllas que requieren inversiones voluminosas en ciertas ramas clave. Obviamente esto es cierto, por las mismas razones que hemos expuesto al describir el modelo de funcionamiento empresario. Lo que no es cierto es que durante las décadas pasadas no se hayan generado excedentes suficientes en el interior de la economía como para satisfacer esas necesidades: simplemente hubo acumulación pero no inversión productiva. Y aquí aparece otra tesis frecuente en la que también se plantean las cosas al revés: la ausencia de inversiones productivas fue usada incansablemente como prueba de que no existía suficiente acumulación de excedentes, es decir como argumento para promover una redistribución de ingresos en contra de los sectores asalariados, pese a que ningún dato indica que el aumento de los ingresos de los no asalariados haya tenido su correlato en un aumento de las inversiones productivas. Volviendo a la apertura financiera externa, es sintomático que se insistía, como alguna vez lo dijo el ex Ministro de Economía Roberto Alemann, en que "para que entren capitales es preciso dejarlos salir", liberalizando por completo los movimientos financieros con el exterior. Si recordamos también cómo las clases privilegiadas se presentaron siempre a sí mismas en términos de defensoras del orden — mientras la inestabilidad las favorecía — paracería existir cierta constancia en ofrecer imágenes argumentales invertidas a la opinión pública. En este sentido, a los ejemplos mencionados se podían agregar otros, como la proclamada intención de Martínez de Hoz de "pasar de una economía de especulación a una economía de producción", o la insistencia en afirmar las ventajas de un manejo ortodoxo y disciplinado de la moneda mientras en la práctica se hace todo lo contrario.

Dentro del modelo que estamos describiendo las experiencias económicas posteriores a 1976 no reflejan un cambio cualitativo en el funcionamiento de la economía argentina. En esencia, ellas aparecen como la profundización de un fenómeno que se venía manifestando desde tiempo antes y que alcanza su plena expresión en esa coyuntura gracias al fortalecimiento político que logran los grupos privilegiados. La historia no determina el presente pero lo condiciona. Los antiguos reflejos especuladores de la élite dirigente permanecían latentes, y en consolidación, en una sociedad que no lograba generar un sistema de aliento a la generación de beneficios en la producción. Las condiciones posteriores a 1976 impulsaron prodigiosamente, en cambio, las oportunidades para captar excedentes a través de los mecanismos monetarios y financieros.

Los aspectos más característicos del modelo fueron la inflación, la variación de precios e ingresos relativos, la tendencia a la hipertrofia de las actividades financieras y la creciente intensidad de los flujos de divisas con el exterior. Los resultados fueron la acumulación de beneficios en actividades ajenas a la producción, el estancamiento acentuado del producto, el deterioro de ingresos de los sectores asalariados y la consolidación de los mecanismos de funcionamiento del modelo.

La inflación argentina es un fenómeno característico. El incremento de los precios locales tiene una velocidad y una persistencia que lo diferencia netamente de cualquier otra economía moderna. Durante un cuarto de siglo — de 1950 a 1975 — la inflación registró un promedio anual de 25%, las tasas de aumentos de precios oscilaron entre un mínimo del 6% y un máximo del 100% en ese lapso. El proceso de aumento de los precios avanzó hacia un nuevo escalón a partir de 1975. En los últimos ocho años, la inflación registró un promedio superior al 200% anual, con un máximo del 800% y sin descender del 100% anual. No se conocen otros ejemplos de procesos inflacionarios de esta magnitud y duración. Una inflación de estas características tiende a modificar el comportamiento de los agentes económicos y afecta a todo el funcionamiento del sistema, desde su dinamismo hasta las formas de reparto de la riqueza. En este sentido, y cualquiera haya sido su origen, la inflación se instaló como un factor funcional de los aspectos más perversos de la economía argentina sin que nadie lograra, o quisiera, ponerle término.

La hiperinflación argentina tiene efectos considerables sobre la evolución de los precios relativos. Si bien toda inflación influye esa relación, la experimentada por la economía argentina es tan intensa que provoca efectos que no se pueden desdeñar. La intensidad de la modificación de los precios relativos se ve acompañada por su brusquedad; las relaciones se modifican en proporción significativa de un día a otro en función de las actitudes y estrategias de los agentes económicos. Esto provoca, en primer lugar, un ritmo inédito en las transferencias de ingresos. Al 10% promedio de inflación mensual, los sectores que no pueden modificar sus precios pierden 10% de ingreso real cada mes; aquellos que pueden modificar sus precios más rápidamente pueden ganar varios puntos mensuales. En los sucesivos momentos de aceleración inflacionaria esas relaciones se hicieron aún más agudas dando lugar a modificaciones sorprendentes de la estructura de los ingresos internos que no llegan a consolidarse en plenitud debido al impacto sucesivo del continuo proceso inflacionario.

La variación de los precios relativos ofrece una oportunidad especial para la valo-

ración del capital-dinero. La compra-venta de ciertos bienes-clave (divisas, propiedades inmuebles y bienes durables en particular) genera beneficios muy elevados en la medida que se realice en la oportunidad más favorable de variación de los precios relativos. La entrada y salida de capitales en cada uno de esos sectores multiplica beneficios sin producción y orienta a toda la estructura de mercado hacia la captación de ganancias por esa vía.

La posibilidad de apropiación de beneficios extraordinarios no hubiera sido tan aguda, quizás, si no fuera porque las políticas ensayadas especialmente a partir de 1976 tendieron a estimular la mayor liquidez posible del dinero en condiciones de elevada inflación. La política oficial creó diversos instrumentos financieros que operan como cuasi-moneda; permitiendo conservar el valor — al contrario que la moneda fiduciaria que ve recortado su poder adquisitivo por la inflación — y ofreciendo el medio para mantener la liquidez y concretar la apropiación de beneficios en el mercado.

La apertura financiera externa facilitó el acceso a las divisas en este juego y ofreció la posibilidad de la fuga de capital en los momentos de riesgo. Es probable que ninguna actividad productiva en el país haya dejado beneficios comparables a los que brindó la combinación de la inflación, el desarrollo del mercado financiero y la apertura al flujo de divisas con el exterior.

Es obvio que las nuevas condiciones de funcionamiento del sistema financiero internacional ofrecieron un marco adecuado para la aplicación de estas políticas y la cosecha de los resultados mencionados. Pero esto ofrece una explicación necesaria, no suficiente. La integración de la economía argentina al mercado financiero internacional se realizó en condiciones y a ritmos que sólo se explican en función de la consolidación del modelo que hemos reseñado. No cabe duda, tampoco, que esta experiencia ha marcado profundamente a los grupos privilegiados, consolidando actitudes y respuestas que tendrán fuerte influencia en los destinos futuros del país. Los resultados que obtuvieron, en términos de beneficios y facilidad de apropiación condicionan la evolución del país tanto o más quizás que la experiencia de fines del siglo pasado y adelanta nuevas dificultades para un desarrollo productivo tan necesario como difícil de llevar a cabo.

3. *El funcionamiento del sistema político*

El examen del peculiar comportamiento empresario de la clase dominante argentina, la recapitulación de su génesis, evolución y efectos sobre la economía, nos demuestra que el caos al que se llegó es bastante explicable y más normal de lo que parece a primera vista. A su turno ese análisis nos servirá para comprender por qué y cómo la inestabilidad política que imperó en el país, por debajo de una apariencia desconcertante, también responde a una lógica profunda. A nuestro juicio hay cuatro cuestiones que resultan decisivas en este ámbito.

a) La tendencia a frenar el crecimiento económico y sus consecuencias

Cesado el impulso externo a la expansión de la economía argentina y agotadas las posibilidades de ampliar la frontera agropecuaria, la prioridad otorgada por los empresarios argentinos a la reproducción ampliada del capital-dinero sobre la del

capital productivo tendió a largo plazo a frenar el crecimiento económico del país. Por cierto muchos otros fenómenos contribuyeron en el mismo sentido, pero el rasgo anotado es singular y marca, según creemos, lo diferencial del caso argentino.

La consecuencia fundamental de este hecho es que deteriora la base de legitimación social de la burguesía en un sistema capitalista, base sobre la cual esta clase puede construir su hegemonía política. Porque es el intenso desarrollo de las fuerzas productivas — y el correlativo crecimiento económico — el fenómeno central a partir del cual se argumenta para justificar la posición privilegiada de la burguesía y hacer que sea aceptada por las clases dominantes. En la medida en que el crecimiento se retrasa o bloquea, todas las relaciones de poder en el seno de la sociedad comienzan a alterarse y los conflictos se agudizan.

La manifestación más ostensible de tal situación es la puja cada vez más descarnada por la distribución de los ingresos respecto de un total que apenas aumenta: todos y cada uno de los sectores pretenden incrementar su participación neta a costa de los demás. La forma más habitual en la que se expresa esa contienda es a través de las variaciones de los precios relativos, progresivamente más abruptas y profundas.

En los países capitalistas avanzados la emergencia de este tipo de crisis estimuló por lo general la aparición de mecanismos de corrección dirigidos a resolverlas, no sólo por las tensiones políticas que generaban sino también — y quizás sobre todo — porque las fluctuaciones de los precios relativos causaban perjuicios directos y graves a la mayor parte de los sectores de la burguesía. En la Argentina, en cambio, la peculiar forma de comportamiento de los empresarios permitía no sólo atenuar los daños sino incluso, a menudo, transformarlos en beneficios para los grupos dominantes. Por consiguiente la búsqueda de mecanismos para restablecer equilibrios resultó mucho más débil, incierta e insuficiente, haciendo que la crisis se prolongara y profundizara hasta un punto incomprensible cuando se la observa desde otras sociedades. En estas condiciones no sorprende que se haya apelado cada vez más a la violencia como método final para controlar y resolver los conflictos; un método, sin embargo, incapaz de corregir las causas originarias de la crisis e inviable para permitir que otros mecanismos lo hagan.

b) La homogeneidad de la clase dominante y la crisis de legitimidad política

Paralelamente al fenómeno anterior, y nacido del mismo origen — el comportamiento peculiar del empresariado —, la homogeneidad de la clase dominante argentina daría lugar a ciertos rasgos característicos del sistema político que se añaden a los que acabamos de anotar, en ocasiones complementándolos y en otras oscureciéndolos.

Más arriba anotamos cómo el rápido desarrollo capitalista producido en el país a partir del último tercio del siglo XIX abrió paso a la formación de una sociedad abierta, en la que imperaba una pronunciada movilidad y un alto grado de autonomía individual. Esto se adecuaba a los requerimientos de la expansión económica que acontecía en un territorio prácticamente despoblado. En comparación con los países europeos y a semejanza de los países “nuevos” de la época, es posible afirmar que socialmente la Argentina era democrática, lo cual contrastaba con el cuasi monopolio del gobierno por parte de un grupo social reducido durante casi toda esa primera fase. Rápidamente se perfilaron con creciente fuerza demandas y presiones

orientadas a lograr una participación política congruente con la nueva composición social del país. No sin luchas, algunas bastante arduas, se consiguió imponer finalmente la reivindicación de que los gobiernos fueran elegidos mediante el sufragio universal y secreto. También contribuyó a ello la similitud entre la evolución social que se había producido en la Argentina y la ocurrida en los Estados Unidos, modelo de las naciones jóvenes de la época, similitud que incitaba a considerar casi natural e inevitable la apertura del sistema político. Por eso una fracción importante dentro del antiguo gobierno elitista entendió prudente aflojar las tensiones que se habían acumulado y aconsejaba sancionar una democratización política amplia en el país.

Sin embargo, debajo del cúmulo de conflictos y presiones que forzaban a la distensión y de las semejanzas que iluminaban la forma de llevarla a cabo, quedaron en la penumbra diferencias básicas entre los Estados Unidos y la Argentina. La concentración del poder económico y la unidad multisectorial de la clase dominante creaban condiciones sustancialmente distintas a las que imperaban en otros "países jóvenes". Ante todo porque la ausencia de fracciones en la burguesía y de conflictos entre ellas dificultaba la creación de dos o más partidos policlasistas al estilo norteamericano, susceptibles de canalizar cada uno de ellos alianzas que atravesaran la sociedad de arriba a abajo y en las que se agruparan, junto a fracciones de las clases dominantes, otras del resto de la burguesía, de los sectores medios y grupos significativos de obreros urbanos y rurales. De manera inversa, al polarizarse los conflictos políticos en torno a la clase dominante, y si bien ésta podía ampliar sus bases de apoyo cooptando algunos sectores del resto de la burguesía y de la clase media, le era muy difícil si no imposible dejar de ser minoritaria en un régimen político en el que imperara el sufragio universal.

Así surgió a la luz el drama de la legitimidad del poder en la Argentina. Porque, en forma muy sintética, resultaba evidente que la disputa por el gobierno quedaba encerrada en una encrucijada irresoluble. Si se pretendía mantener un régimen de democracia restringida, en el que la clase dominante pudiera instrumentar políticamente su poder económico, se engendraba una obvia y, a la larga, incontrolable contradicción con la vigencia de una estructura social democrática que, por lo demás, correspondía a las necesidades de la economía argentina. Pero si se admitía que los gobiernos fueran elegidos mediante el sufragio libre y universal de la mayoría de los ciudadanos, las fuerzas políticas que podían representar los intereses de la clase dominante — por la misma unidad que ella poseía — quedaban inevitablemente en minoría. El grupo social y económico más poderoso del país quedaba así excluido del acceso legal al gobierno. Contradicción no menos insuperable que la anterior mientras se mantuvieran las estructuras económicas y sociales que se habían creado.

La respuesta histórica a esta singular situación es conocida: fue imposible consolidar un régimen político legal, único, viable y universalmente aceptado. La alternancia se dio entonces por la sucesión entre períodos en los que funcionó un sistema democrático amplio de elección de gobiernos y otros en los que las elecciones se limitaban o los gobiernos se imponían por la fuerza.

Como decíamos al comienzo, esta cuestión en parte se complementa y en parte oculta la que examinamos en el punto anterior. Se complementa porque en la puja distributiva desencadenada por el lento crecimiento económico la confrontación política entre la clase dominante y los sectores populares aparece claramente a la

luz: la alternancia entre gobiernos libremente elegidos y gobiernos impuestos casi siempre se asocia ostensiblemente con políticas opuestas de distribución de ingresos.

Sin embargo, quizás por esa misma complementación, la oposición entre clase dominante — visualizada como oligarquía — y pueblo resulta tan notoria y deslumbrante que tiende a dejar en la penumbra las razones más profundas por las cuales los sectores privilegiados argentinos son incapaces de propulsar un crecimiento económico satisfactorio.

Creemos que ahí está el origen de algunas confusiones bastante difundidas en la Argentina. Una de ellas, por ejemplo, es la desmesurada importancia adjudicada a la influencia de intereses extranjeros — primero británicos y luego norteamericanos — para explicar el atraso del país. Según este enfoque la oligarquía argentina habría sido un agente particularmente servil de las grandes potencias imperiales que trataban — y tratan — por todos los medios de impedir que la Argentina crezca. Aunque dotada de una gran fuerza psicológica, esta teoría presenta todos los inconvenientes de otras que también se basan en medias verdades. No se entiende, por ejemplo, por qué las clases privilegiadas argentinas tuvieron que ser más “cipayas” que las australianas o las canadienses, o por qué los Estados Unidos pudieron estar menos interesados en frenar el desarrollo industrial de Japón, Corea, Taiwan, México, Brasil, etc. que preocupados por impedir el de la Argentina.

Otra confusión habitual es la de considerar que la concentración económica en manos de la clase dominante — en el agro, en la industria, en el comercio y en la banca — provoca por sí misma una tendencia a frenar el desarrollo económico y a mantener el atraso social y político. Sin embargo existen países, como por ejemplo Suecia, en los que una alta concentración económica dentro de la burguesía capitalista no resultó incompatible con un apreciable desarrollo económico, un gran progreso social y una sólida democracia política.

A nuestro juicio la influencia de los intereses extranjeros resultó particularmente perniciosa porque los empresarios capitalistas argentinos desarrollaron el comportamiento peculiar que antes describimos y no a la inversa. Así lo vemos, por ejemplo, en la presión que ejercieron para abrir la Argentina al sistema financiero internacional a fin de poder colocar los excedentes líquidos acumulados en el país. Del mismo modo la concentración económica que aquí existe no es una causa sino un efecto de la forma de funcionamiento de los empresarios argentinos, y su nocividad reside en que multiplica y agudiza las consecuencias económicas y políticas de tales comportamientos.

Cuando nos colocamos en esta perspectiva se comprende la importancia del siguiente aspecto que deseamos examinar: la manipulación del poder del Estado.

c) La manipulación del poder de Estado

No es éste el lugar para analizar la naturaleza y el rol del Estado en las sociedades modernas, ni siquiera en el ámbito más preciso y restringido de la Argentina. Simplemente deseamos señalar cómo algunos aspectos que surgen del análisis anterior influyeron sobre el papel desempeñado por el Estado argentino y cuáles fueron sus consecuencias sobre el sistema político. Desde la crisis mundial de 1930 y durante las dos décadas siguientes, el accionar del Estado y el uso del poder que dispone adquirieron rasgos novedosos respecto de la historia anterior del país.

En primer lugar, tal como lo señalamos más arriba, se verificó que a través del Estado podían fijarse condiciones de funcionamiento de la economía (tipos de cambio, precios, etc.) que modificaban la distribución del ingreso entre diferentes sectores productivos y, correlativamente, entre los distintos grupos y clases sociales existentes en el país.

Luego se comprobó, como también vimos, que ese poder podía manejarse tanto en favor como en contra de la clase dominante. Por consiguiente, la captura del gobierno y el control del poder estatal pasó a constituir una cuestión política esencial no ya en términos generales sino en relación a los beneficios o perjuicios inmediatos que de allí podían derivarse.

El lugar central que así pasó a ocupar el Estado en la vida económica, social y política argentina, unido a la destrucción de las instituciones que normaban y aseguraban el control del aparato estatal por parte de la sociedad civil, otorgó a los funcionarios estatales una creciente autonomía política, en particular a las Fuerzas Armadas cuya intervención servía para derrocar y ocupar gobiernos.

De este modo en el escenario político argentino se fue perfilando, progresivamente, un nuevo actor que comenzaría a tratar de acumular poder propio. Más allá de la ambigüedad originada en la propia naturaleza de las Fuerzas Armadas, más allá de la perturbación que introdujeron en el sistema institucional argentino, aquí nos interesa señalar un par de aspectos de la relación que se creó entre ellas y la clase dominante.

Ante todo cabe subrayar la dualidad a la que quedó sometida la clase dominante respecto a los militares. Por un lado le era indispensable contar con ellos para desplazar gobiernos electos en los que no tenía cabida. Pero al mismo tiempo esta apelación dio nacimiento y consolidó — al repetirse — a un nuevo personaje político que iría definiendo intereses propios y en ocasiones opuestos a los de la clase dominante.

En efecto, en la medida en que las Fuerzas Armadas comenzaron a ejercer poder político no pudieron evadirse de los problemas que se planteaban a ese poder en la Argentina, empezando naturalmente por los que generaba el lento crecimiento económico. Si la clase dominante no era capaz — como no lo fue — de dar respuestas a la cuestión, los militares estaban obligados a buscarla por sí mismos, tanto para justificar su intervención en el gobierno como — sobre todo — para permanecer en el ejercicio del poder. Y la buscarían en el único lugar donde podían actuar, es decir en el seno del Estado.

No es extraño, entonces, que las Fuerzas Armadas hayan impulsado la intervención del Estado en la economía, desbordando sus funciones reguladoras e incorporando una participación activa en la producción de bienes y servicios. Al hacerlo entraban en contradicción con la clase dominante, tanto por competir en la distribución del ingreso nacional y de los excedentes generados, como por introducir en esta disputa a un actor económico dotado de atribuciones especiales y privilegiadas para dirimirla.

Así se fueron acumulando contradicciones que, como consecuencia última, determinaron que sistemáticamente la clase dominante acabara oponiéndose a los regímenes militares y conspirando contra su estabilidad. Esta oposición, sin embargo, llevaba inevitablemente a que los regímenes militares trataran de formar una alianza

con los sectores populares o llamaran a elecciones para designar a un nuevo gobierno, y en ambos casos la clase dominante quedaba excluida.

Lo curioso es que esta dinámica también encerraba a las Fuerzas Armadas en un dilema insoluble que les impedía mantenerse en el gobierno. Desde ya lo perdían si llamaban a elecciones, pero también en definitiva les ocurría lo mismo si ensayaban una alianza con los sectores populares. Porque en este último caso el monopolio de la fuerza física que los militares detentaban dejaba de ser imprescindible para ejercer el gobierno, con lo cual su control pasaba poco a poco a la organización política de los sectores populares. Al respecto la experiencia peronista fue para las Fuerzas Armadas tan instructiva como traumática: el discutido liderazgo de Perón dentro del Ejército fue suficiente, sin embargo, para asumir el liderazgo de un gran movimiento popular que, a su turno, utilizó para revertirlo en un control político personal sobre las Fuerzas Armadas.

En otros términos, la clase dominante, que ha promovido reiteradamente la intervención política de los militares, siempre terminó por hacerles imposible el ejercicio del gobierno, mientras que la reversión de alianzas de los militares hacia los sectores populares acabó por hacerlo innecesario.

La inestabilidad política crónica de la Argentina, que afecta por igual a los gobiernos electos como a los de fuerza, parece así bastante explicable. El resultado se asemejaría notablemente a un eterno retorno si no existiera, por debajo, otra dinámica más profunda y dramática. Pasemos, entonces, a la última cuestión que nos completa el cuadro.

d) La tendencia a destruir las formas de organización social

En la Argentina el caos económico producido por la inestabilidad política perjudica — a la corta o a la larga — a todos menos a la clase dominante, precisamente por su peculiar forma de comportamiento empresario que le permite obtener beneficios en este tipo de situaciones.

Esa es una ventaja fundamental que imprime una orientación definida al proceso político, más allá de los proyectos e intenciones explícitas de los actores sociales intervinientes, incluida la misma clase dominante. Al ser esta clase la única que no sufre perjuicios, la perspectiva del caos económico no sólo no la obliga a cambiar su comportamiento — más bien lo refuerza — sino que además le otorga grados de libertad de que los demás carecen y que, por añadidura, se reducen progresivamente.

En virtud de esta asimetría la clase dominante va ganando poder a lo largo del tiempo y del desorden. Ante todo porque la inestabilidad política y la exacerbación de los conflictos comenzaron por romper las reglas institucionalizadas del juego político y terminaron por pulverizar el complejo tejido de organizaciones sociales que directa o indirectamente intervienen en la disputa por el poder y estructuran el cuerpo social. La destrucción es muy visible en el caso de las instituciones y formas republicanas de gobierno —la organización y desempeño del Poder Ejecutivo, la desaparición del Parlamento, la degradación del Poder Judicial—, menos ostensible en los partidos políticos y los sindicatos, y casi imperceptible en el cúmulo de asociaciones de todo tipo que organizan la vida de corporaciones profesionales, ámbitos de trabajo y núcleos poblacionales. Sin embargo todas esas organizaciones se debilitan, se deterioran hasta quedar destruidas, cuando la inestabilidad se

prolonga, cuando la violencia y la manipulación acaban por erigirse en los últimos y únicos métodos para dirimir los conflictos.

En el fondo a lo que asistimos es a la desaparición progresiva — en medio de vaivenes — de todas las formas preexistentes de control social sobre el ejercicio del poder. Durante el último cuarto de siglo este fenómeno fue haciéndose cada vez más nítido en la Argentina, hasta que resultó abrumador desde el golpe militar de 1976. A partir de entonces se comprobó hasta qué punto tal situación favorecía a la clase dominante, que pudo actuar con un mínimo de trabas y desplegó con toda fuerza la naturaleza profundamente especulativa de su comportamiento.

Por supuesto la clase dominante no fue un mero beneficiario pasivo de este proceso de desorganización social. Al contrario, si alguna línea clara surge de su actuación política — más allá de los proyectos positivos que pudieron imaginarse — es precisamente la intensa labor demoledora que desarrolló.

En el ámbito estrictamente político al exacerbar conflictos y ahondar rupturas dentro del resto de la sociedad. Así lo testimonian, por ejemplo, el aliento y estímulo que prestó a la represión desatada por el gobierno militar, circunstancia que creó un profundo foso político entre las Fuerzas Armadas y los sectores populares.

Paralelamente prosiguió con ardor y gran eficacia la tarea de dismantelar el poder del Estado, de manera que cada vez resulte más difícil manipularlo en su contra y más fácil manipularlo a su favor. Aparte de una formidable ofensiva ideológica emprendida en esa dirección, durante los últimos años se tomaron medidas prácticas de gran trascendencia para consolidarla en los hechos.

La más importante, probablemente, ha sido la de crear — usando el poder y los recursos del Estado — un sistema financiero que prácticamente despojó a los poderes públicos de su capacidad para manejar la moneda, transfiriéndolo a un sector privado que está en manos de la clase dominante. Afianzado por la vinculación establecida con el sistema financiero internacional, garantizado por el peso de una enorme deuda externa que reduce sustancialmente la capacidad de maniobra de los futuros gobiernos, la clase dominante ha pasado a controlar un sector clave desde el cual puede influir decisivamente sobre la determinación de los precios y la distribución del ingreso en el país.

Lo que nos interesa destacar de este proceso, en suma, es cómo la dinámica de la inestabilidad fue destruyendo la organización y el poder de las demás clases sociales y del mismo Estado, mientras permitió crear y consolidar nuevas bases de poder para la clase dominante.

IV. Conclusión

El 30 de octubre de 1983 los argentinos eligen el gobierno de la Nación, su Presidente y sus representantes en el Parlamento. Por doquier se alaban las ventajas de la democracia y la necesidad de instaurarla definitivamente en la Argentina. Sin embargo, al mismo tiempo es claro para nosotros — y universalmente sentido por todos — que frente a la oposición de la clase dominante y la presencia de los militares las nuevas autoridades tendrán grandes dificultades para gobernar. Su posición será

más precaria que la que existió en 1973, mucho más que la que se presentó en 1963 e incomparablemente más complicada que la que se vivía en 1943.

Por nuestra parte no nos cabe duda de que en las condiciones actuales, la tarea de instaurar la democracia será infructuosa mientras el funcionamiento de la economía esté sometido al peculiar comportamiento que caracteriza a la clase dominante. Examinar cómo podría llegarse a modificarlo exigiría otro trabajo y, posiblemente, otro ámbito.

Entre tanto el caso argentino constituye a nuestro entender un ejemplo caricaturesco de lo que puede suceder cuando las pautas de comportamiento capitalista se apartan levemente del modelo canónico al que estamos acostumbrados. Aunque exagerado, este ejemplo quizás sirva para prever los riesgos que se correrían en otros lugares cada vez que aparezcan fenómenos de este tipo.

Sólo nos queda ahora una incógnita final: ¿habremos caído también en el pecado de soberbia creyendo que entendemos mejor lo que pasa en la Argentina?

Referencias Bibliográficas

SABATO, Jorge F.

- *Notas sobre la formación de la clase dominante en la Argentina moderna.* Buenos Aires: CISEA, 1979.
- *El comportamiento de los empresarios rurales y la cuestión tecnológica.* Buenos Aires: CISEA, 1980.
- *La pampa pródiga: claves de una frustración.* Buenos Aires: CISEA (Ensayos y Tesis N° 1), 1981.
- *Riesgo y adopción de tecnología en la Argentina. Construcción de un modelo.* Buenos Aires: CISEA, 1982.

SCHVARZER, Jorge

- *Martínez de Hoz. La lógica política de la política económica.* Buenos Aires: CISEA (Ensayos y Tesis N° 4), 1983.
- *El endeudamiento externo como pivote de la especulación financiera.* Buenos Aires: Cuadernos del Bimestre N° 1, 1983.
- *Estrategia industrial y grandes empresas. El caso argentino.* Buenos Aires: Desarrollo Económico N° 40, 1978.
- *Notas sobre historia de la industria argentina:*
1920-55 en Todo es Historia N° 124, 1977.
1955-80 en El País de los Argentinos. Buenos Aires, 1980.
1976-80 en Realidad Económica N° 40, 1981.